

**KATE DOYLE
E ISSA LUNA PLA**

México fue un modelo de transparencia, se democratizó la información del gobierno creando el INAI como vigilante. Hoy el derecho a la información está bajo ataque.

Transparencia en picada

La transparencia y el derecho a la información están bajo ataque en México. El presidente Andrés Manuel López Obrador asumió el cargo en 2018 prometiendo combatir la corrupción. Ahora parece empeñado en socavar las mismas instituciones creadas para alcanzar esos ideales. El presidente ha criticado a los jueces que fallan en su contra, recortó el financiamiento para que el INE supervise elecciones justas y libres, y amenaza a las instituciones del Sistema Nacional Anticorrupción. López Obrador y Morena develaron desde abril su plan para abolir al organismo independiente que garantiza la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos: el Instituto Nacional de Acceso a la Información. El INAI es una de las innovaciones democráticas más exitosas en el México moderno. Fue creado para defender la libertad de información y luchar contra los excesos del secretismo gubernamental. México fue una vez un modelo global de transparencia. En un movimiento histórico en 2002, México promulgó una legislación pionera que otorgó a los ciudadanos el derecho a obtener información sobre su gobierno por primera vez, marcando un hito en la historia política del país y su transición a la democracia. Grupos de la sociedad civil, periodistas y líderes políticos de la oposición jugaron un papel crítico en la aprobación de la ley, justo después de que se pusiera fin a más de siete décadas de gobierno autoritario. Para obstaculizar el regreso del

modelo de control del poder en uno solo partido, se democratizó la información del gobierno, creando el Instituto Nacional de Acceso a la Información como vigilante.

Sus resoluciones a favor de la transparencia han localizado expedientes relacionados con graves violaciones a los derechos humanos en casos como Ayotzinapa y Tlatelolco; han revelado los nombres de más de 700 empresas fantasma que recibieron contratos y luego presuntamente desviaron fondos a campañas políticas y crimen organizado; y expusieron acuerdos entre la compañía transnacional incriminada por corrupción Odebrecht y Pemex, todo esto durante la administración de los gobiernos previos a López Obrador. Como resultado de su trayectoria, el INAI se ha convertido en un faro de mejores prácticas en América Latina, Asia y Europa, contribuyendo al desarrollo de instituciones similares en todo el mundo y abriendo la conciencia de los ciudadanos. A pesar de ello, López Obrador considera al INAI un instrumento de poder de la élite que malgasta el dinero de los contribuyentes.

En abril, el entonces secretario de Gobernación y ahora aspirante a la presidencia, Adán Augusto López Hernández, dijo en una reunión privada a los senadores que el presidente tenía la intención de paralizar el INAI por medio de negarse a nombrar a los comisionados. Sin estos nombramientos, el Senado ha dejado al organismo sin el quórum necesario de cinco (de siete) comisiona-

dos requeridos para decidir sobre las solicitudes de transparencia. Esta omisión equivale a destruir el poder del INAI decapitándolo. Hoy tiene más de 7000 resoluciones acumuladas y cada día se suman 500. Es decir, 500 oportunidades diarias que se pierden para que los ciudadanos mexicanos exhiban la corrupción y exijan un gobierno que rinda cuentas, que organice elecciones justas, y que cumpla con la ley.

Sin los comisionados completos, el INAI no es capaz de ejercer la autonomía técnica y de gestión, y si continúa así, tampoco podrá ejercer su capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto, conforme al artículo 6 de la Constitución mexicana. La defensa de esta autonomía está en el campo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en estos momentos. Es la misma autonomía que entra en conflicto con la visión del presidente, quien busca evitar los escándalos de corrupción (los que alguna vez lo llevaron a él al poder) y ahora jueguen en su contra y en la de su partido, justo en las elecciones más grandes de la historia de México basadas en la moneda de oro de la autocracia: la popularidad.

Kate Doyle es investigadora del Archivo de Seguridad Nacional @doylekate

Issa Luna Pla es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM @ilunapla

